Reclamación de indemnización de daños del trabajador a su empresa por accidente laboral.

Acción y prescripción

Lourdes López Cumbre

Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cantabria

Consejera académica de Gómez-Acebo & Pombo

El trabajador accidentado puede solicitar una indemnización de daños y perjuicios a su empresa. Mas, si esta última ha de abonar un recargo de prestaciones, surge la duda sobre las posibilidades de interrupción de aquella acción cuando se reclama contra esta sanción. La jurisprudencia no se manifiesta homogénea en este sentido e introduce matices no siempre aclaratorios.

1. Los accidentes laborales tienen, amén de la desgraciada consecuencia para la víctima, una serie de derivaciones de responsabilidad. En ocasiones, las acciones jurídicas susceptibles de ser ejercidas son varias, pero pueden conectarse —y entorpecerse— entre sí en atención al juego de la prescripción o de la caducidad. Ocurre así, por ejemplo, cuando el trabajador accidentado solicita una indemnización por los daños ocasionados a su empresa, pero, a su vez, esta última es objeto de una demanda de sanción o de recargo de prestaciones que puede afectar al plazo de prescripción de aquélla. En efecto, el artículo 59.1 del Estatuto de los Trabajadores (LET) prevé un plazo general de prescripción de un año para todas las acciones que no tengan señalado uno distinto. Y, en este sentido, es necesario analizar si las actuaciones administrativas destinadas a imponer una sanción o el recargo de prestaciones afectan al transcurso del año de prescripción con que cuenta el trabajador accidentado para reclamar la correspondiente indemnización a su empleador.

De hecho, la apreciación de la relación entre las acciones de recargo de prestaciones e indemnización por daños y perjuicios no parece haber tenido un encaje homogéneo en la

Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

doctrina del Tribunal Supremo. En algunas ocasiones no ha habido inconveniente alguno en admitir la absoluta y total independencia entre ambas acciones, desvirtuando cualquier intervención del plazo de prescripción de una sobre otra. En este sentido, se considera que en la reclamación por daños y perjuicios operan las reglas sobre prescripción del Estatuto de los Trabajadores (un año), mientras que en el recargo de prestaciones lo hacen las de la Seguridad Social (cinco años). O se aplica la prescripción del Estatuto de los Trabajadores o la de la Ley General de Seguridad Social.

En segundo lugar, no sólo es susceptible de consideración una regulación diversa, sino que la naturaleza jurídica de las cuantías reclamadas es asimismo heterogénea; de hecho, el funcionamiento del recargo está disciplinado por la propia Ley General de Seguridad Social, que lo cuantifica en un porcentaje determinado a partir del montante de la prestación de la Seguridad Social. Por lo tanto, desde que existe la prestación de la Seguridad Social es claro que cabe reclamar el recargo y viceversa. El plazo de prescripción, por fuerza, ha de anudarse al momento en que se reconoce el derecho al percibo de una prestación derivada de alguna contingencia profesional. Sin embargo, los daños y perjuicios generados por un incumplimiento empresarial en materia de salud laboral pueden reclamarse a partir de hitos bien diversos, siendo lo principal que se hayan fijado las consecuencias de la conducta ilícita. La dual naturaleza del recargo (prestacional para el trabajador, sancionadora para el empleador) conduce a que el análisis sobre la concurrencia de la prescripción deba realizarse a partir de premisas diversas a las propias de una compensación por los daños causados (meramente indemnizatoria) (STS de 17 de marzo del 2015, Ar. 1665).

Sin embargo, el tribunal ha avalado, entre otras decisiones, la interrelación entre ambas instituciones. Por una parte, porque, aunque no se acepta que todos los elementos que integran la noción del recargo de prestaciones son equivalentes a los que forman el supuesto determinante de la denominada *indemnización civil adicional*, no puede olvidarse que las eventuales diferencias habría que situarlas precisamente en el campo de las infracciones —por el carácter sancionador que suele asociarse al recargo y el carácter reparador que tiene la indemnización— (STS de 12 de julio del 2013, Ar. 6578). Y, por otro lado, porque las diferencias existen, pero también los elementos de identidad y, entre ellos, la relación de causalidad se sitúa en un plano en el que no cabe desconocer la identidad existente entre los dos institutos.

Tal heterogeneidad contrasta también al decidir el Tribunal Supremo que la tramitación de actuaciones administrativas (acta de infracción, expediente de recargo de prestaciones) carece de trascendencia respecto del cómputo del plazo prescriptivo en materia de responsabilidad indemnizatoria por accidente de trabajo —pues la acción sobre recargo de prestaciones es diferenciada e independiente y dirigida a obtener una compensación autónoma— y que, por su carácter sancionador, no es computable en el *quantum* indemnizatorio total (STS de 2 de octubre del 2000, Ar. 9673). En este sentido, «... cuando se ha dictado la correspondiente resolución firme en proceso de invalidez [es] cuando el beneficiario conoce cuáles van a ser las consecuencias que las secuelas le van a producir y cuáles los perjuicios que de ellas se van

a derivar. Por tanto, debe ser el momento de conocimiento de esta resolución el punto de partida para el ejercicio de la acción de daños y perjuicios» (STS de 11 de diciembre del 2013, Ar. 8181, FJ 2).

Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio del 2015, Ar. 4130, sí que acepta que las actuaciones desarrolladas respecto del recargo de prestaciones impiden que haya prescrito la acción para reclamar responsabilidad indemnizatoria a la empresa. Cuando el trabajador presenta una primera demanda por daños y perjuicios ante la jurisdicción civil, se interrumpe el plazo de prescripción. Desde ese momento, las sucesivas acciones se hallan encaminadas al resarcimiento del daño, buscando la apreciación de una responsabilidad empresarial que, finalmente, se declara. En consecuencia, el plazo estuvo interrumpido «hasta la obtención de la sentencia firme en tanto que la acción de reclamación de daños y perjuicios guarda evidentes vinculaciones con la determinación de la responsabilidad empresarial que, en un grado y con alcance distinto, puede también constituir el objeto del procedimiento de recargo de prestaciones, hasta el punto de poder afirmarse que entre los dos tipos de litigios concurren nexos de conexión relevantes en aras [de] la determinación de los hechos» (FJ 2).

2. Pues bien, ahora la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre del 2019, Ar. 7788, introduce nuevos matices en este análisis. Se aborda aquí la condena a la empresa y a la aseguradora —como consecuencia de un accidente de trabajo— a pagar al trabajador, de forma solidaria, la cantidad de 91 627,50 euros. La aseguradora recurre en casación para unificar la doctrina, siendo uno de los principales motivos del recurso precisamente la aplicación del plazo de prescripción de la acción interpuesta por el trabajador.

En la instancia, y en aplicación de la doctrina establecida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio del 2015, Ar. 4130, se consideró que el plazo para reclamar el recargo de prestaciones quedaba interrumpido por la solicitud de responsabilidad indemnizatoria o la activación de un procedimiento sancionador por parte de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, y quedaba suspendido mientras se sustanciaba dicho procedimiento. Como manifiesta la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre del 2019, Ar. 7788, en su fundamento jurídico primero, el efecto suspensivo se produce «por la conexión material que se aprecia en orden a la determinación de los requisitos necesarios para afirmar tanto el recargo de prestaciones como la responsabilidad empresarial cuando se reclaman unos daños y perjuicios». Atendiendo a todos estos argumentos, se aprecia la prescripción, pues no hay expediente o procedimiento de carácter prejudicial que justifique la pasividad del trabajador para reclamar los daños y perjuicios que considera existentes. Del mismo modo y con la misma base, la sentencia dictada en suplicación estima también que «entre los dos tipos de litigios concurren nexos de conexión relevantes en aras [de] la determinación de los hechos. Nexos de conexión al que debe reconocérsele una doble vía, esto es, lo mismo tendrá efectos cuando sea la acción de daños y perjuicios la primera que se ejercite, interrumpiendo con ello la correspondiente a la reclamación de recargo de prestaciones, como al contrario, cuando sea ésta la que se plant[ee]

en primer lugar, en cuyo caso interrumpiré el plazo prescriptivo de la de daños y perjuicios ejercitada con posterioridad». Pero la empresa aseguradora, basándose en la tesis defendida por este mismo tribunal en su Sentencia de 4 de julio del 2006, Ar. 8675, advierte que el plazo de prescripción de un año pudo ejercerse y transcurrió antes de que el trabajador reclamase responsabilidad indemnizatoria a la empresa por cuanto carece de efectos interruptivos de dicha prescripción el que se haya seguido paralelamente un proceso por recargo de prestaciones, porque se trata de acciones independientes.

Conviene precisar que el Tribunal Supremo en esta Sentencia de 21 de noviembre del 2019, Ar. 7788, no estima decisiva la diferencia que existe entre el asunto que se recurre y la sentencia de contraste. Y es que, en el presente caso, quien reclama por recargo de prestaciones es la empresa frente a su imposición, mientras que en la sentencia de contraste es el trabajador el que lo hace. Pues bien, el Tribunal Supremo entiende que dicha diferencia «concorre, pero lejos de impedir la contradicción, la refuerza (*a fortiori*). Si la sentencia de contraste considera que no se interrumpe el plazo de prescripción en la reclamación de responsabilidad indemnizatoria cuando el propio trabajador acciona reclamando la imposición del recargo de prestaciones, con mayor motivo lo haría si quien hubiera accionado fuese la empresa (rechazando su imposición)» (FJ 2).

3. Siendo la prescripción una institución no fundada en principios de estricta justicia, sino en los de abandono o dejadez en el ejercicio del propio derecho y en el de la seguridad jurídica, considera el Tribunal Supremo que su aplicación no debe ser rigurosa, sino cautelosa y restrictiva; así pues, sólo ha de perjudicar a quien —con su inactividad— haya hecho efectiva dejación de sus derechos. Ahora bien, resulta evidente que el plazo de prescripción aplicable a las reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios atribuibles a la empresa y derivados de accidente de trabajo o de enfermedad profesional es el de un año, ex artículo 59.2 del Estatuto de los Trabajadores. Y también lo es que la fecha inicial para el cómputo de los plazos de prescripción de todas las acciones comienza en el momento en que se pudieron ejercer (arts. 59.2 LET y 1969 CC, respectivamente). De ahí que se deduzca que el plazo no puede comenzar, en el supuesto que nos ocupa, hasta que el beneficiario tenga un cabal conocimiento de las secuelas del accidente y de las mermas que tales secuelas producen, tanto en su capacidad de ganancia como en su patrimonio biológico. «Y cuando se sigue un procedimiento judicial para la fijación de las lesiones padecidas, el plazo sólo comienza a correr desde que el mismo se agota, porque la resolución del INSS en vía previa "no fue firme hasta que recayó la citada sentencia de la Sala de lo Social, y sólo desde tal firmeza se pudo iniciar el cómputo del referido plazo prescriptivo", "pues sólo hasta ese momento se supo con certeza cuáles eran las dolencias y secuelas que el actor padece a consecuencia del accidente de autos"; y "obviamente, la solución sería otra si la parte se aquietase a la resolución administrativa de la Gestora respecto de la incapacidad reconocida, ya que en tal caso habría que estar el informe propuesta [sic]"»(FJ 3).

Ese conocimiento pleno sólo se tiene cuando se dicta una resolución firme en materia de incapacidad permanente. Si la firmeza no fuera judicial, sino que se debatiera y resolviera en

sede administrativa, el momento inicial para el cómputo de la prescripción no podrá ser otro que el de la preclusión del plazo de treinta días del que disponen las partes para formular la reclamación previa, porque hasta su agotamiento no adquiere definitivamente estado ni deviene firme lo resuelto en ella.

Cuestión distinta es la del reconocimiento de la deuda por el deudor por cuanto, y tal y como estableció la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero del 2019, Ar. 2033, se interpreta que la prescripción de las acciones se interrumpe, ex artículo 1973 del Código Civil (CC), no sólo por su ejercicio ante los tribunales o por reclamación extrajudicial del acreedor, sino también por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. Y, en este caso, el término *reconocimiento* ha de ser interpretado extensivamente, «de tal forma que deba aceptarse como tal cualquier forma o conducta por parte de la persona obligada que así lo ponga de manifiesto, en coherencia con la doctrina de los actos propios» (FJ 3).

4. Con este trasfondo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre del 2019, Ar. 7788, aquí analizada, mantiene la tesis defendida en el 2006 y se aparta de la del 2015, aun cuando hace un esfuerzo por indicar que no existe ninguna contradicción entre ambas, pues «la STS 14 julio 2015 (rec. 407/2014) está contemplando un supuesto en que el trabajador viene desarrollando actuaciones para conseguir una mejor reparación de las secuelas de su accidente de trabajo y la declaración de responsabilidad empresarial. La STS 4 julio 2006 (rec. 834/2005) está resolviendo un supuesto en que el accidentado no es quien pone en marcha actuaciones para reclamar sus derechos, sino que es la empresa quien rechaza la existencia de responsabilidad» (FJ 3).

Una serie de premisas asientan este último pronunciamiento judicial, entre otras, a) que la aplicación e interpretación de las reglas sobre prescripción de la acción por daños y perjuicios derivados del accidente laboral deben ser restrictivas; b) que el plazo general de un año estipulado en el artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores es el que gobierna la prescripción de la acción ejercida; c) que el día inicial del cómputo es el de la firmeza de la resolución (administrativa o judicial) que aquilata las consecuencias del accidente, pues sólo entonces cabe conocer el modo de repercutir las prestaciones de la Seguridad Social sobre los daños y perjuicios; d) que el recargo de prestaciones y la responsabilidad indemnizatoria poseen notables diferencias, pero en aspectos como la relación de causalidad despliega sus efectos la cosa juzgada de una institución respecto de la otra; e) que carece de efectos sobre el cómputo del plazo de un año el que se siga un proceso en el que la empresa reclama frente a la imposición del recargo de prestaciones, y f) que el plazo para la imposición del recargo de prestaciones queda interrumpido cuando el trabajador reclama judicialmente responsabilidad indemnizatoria derivada del accidente laboral padecido.

Pues bien, por todas estas razones, el Tribunal Supremo entiende, en este último pronunciamiento, que aquí «no es el acreedor quien ha reclamado la imposición del recargo o denunciado la existencia de una infracción administrativa. Por el contrario, es la empresa (deudora) quien

niega los incumplimientos que se le atribuye[n]. Lejos de estar ante reconocimiento de deuda, estamos ante su negación. Los actos a los que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra anuda la interrupción de la prescripción son los que desarrolla la empresa para combatir su responsabilidad o los que proceden de tercero (Inspección de Trabajo, INSS). Por lo tanto, el supuesto es bien diverso al de la STS de 14 julio 2015 (rec. 407/2014), cuya doctrina quiere aplicarse, de modo extensivo, por la sentencia recurrida» (FJ 4). Al igual que sucede en el caso resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio del 2006, Ar. 8675, aquí el trabajador ha permanecido durante más de un año sin haber desarrollado actuación alguna tendente a conseguir uno u otro tipo de reparación de las secuelas derivadas de su accidente de trabajo. «Es la empresa quien ha accionado, y no él; lejos de haber un acto de reconocimiento de deuda, lo que está haciendo el empleador es rechazar su responsabilidad. Por esa razón, el criterio de nuestra STS de 14 de junio del 2015 no puede extenderse al presente supuesto y sí es pertinente reiterar, por razones de seguridad jurídica, la doctrina acuñada en 2006» (FJ 4). Ahora bien, lo anterior «no supone rechazar la conexión que existe entre uno y otro procedimiento (el de recargo y el de responsabilidad indemnizatoria), especialmente en orden a la determinación de lo acaecido, como admite nuestra STS 12 julio 2013 (rec. 2294/2012). Pero ahora no está en cuestión la incidencia de lo acordado en el litigio sobre recargo de prestaciones respecto del posterior procedimiento sobre responsabilidad; lo que se discute es si las actuaciones que pone en marcha la empresa (reclamando frente al recargo impuesto) son hábiles para interrumpir el plazo de un año que rige la reclamación del trabajador frente a la misma» (FJ 4). En consecuencia, «reiterando nuestra doctrina, debemos afirmar que la resolución judicial que desestima la demanda empresarial contra la decisión administrativa que impone el recargo no es hábil para incidir en el plazo de prescripción de la acción por daños y perjuicios que asiste al trabajador. Éste pudo y debió ejercitarla a partir de la firmeza de la resolución administrativa que declara la contingencia (accidente laboral) y sus consecuencias a efectos de la prestación correspondiente (IPT)» (FJ 4).

Esta alambicada solución discurre entre los diferentes pronunciamientos previos del Tribunal Supremo intentando sistematizar una tesis que no puede ser uniforme. Aquí, en este caso, para este supuesto, la reclamación empresarial contra su sanción de recargo de prestaciones no incide en la interrupción del plazo de prescripción de un año del que dispone el trabajador para reclamar, en su caso, daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo. La inactividad del trabajador en este punto —en tanto en cuanto pudo actuar desde que alcanzó firmeza la resolución administrativa o judicial de su incapacidad— tiene una consecuencia y es que su acción ha prescrito. Pero no se aclara si, en caso de ser el trabajador el que reclamara contra el recargo impuesto a la empresa, la conexión debería ser la misma o, mejor, la autonomía de las acciones debería defenderse, por cuanto, como aquí, el trabajador accidentado pudo, asimismo, actuar desde el momento en que conoció la firmeza de la resolución —administrativa o judicial— sobre su prestación de la Seguridad Social.